

Políticas Públicas y el Puente Academia-Sociedad: Lecciones desde la Extensión Universitaria del Departamento de Ciencia Política (Universidad de la República)

Rodrigo Martínez Rodríguez 
Universidad de la República

Public Policies and the Bridge between Academia and Society: Lessons from the University Extension of the Department of Political Science (University of the Republic)

Resumen |

Este artículo analiza la interacción entre la academia y la sociedad en el ámbito de las políticas públicas, tomando como base la experiencia en extensión universitaria del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. A través de un análisis documental de convenios institucionales y aportes al debate público en la prensa entre 2011 y 2022, se identifica una predominancia de colaboraciones con entidades estatales. Estas muestran variaciones significativas tras el cambio de gobierno en 2020, lo que evidencia una dependencia de la demanda de conocimiento experto y cuestiona la relación entre ciencia y política. Asimismo, se señalan desafíos para ampliar la disciplina hacia actores departamentales y locales. Los aportes al debate público se centran en eventos coyunturales relevantes y se caracterizan por juicios objetivos. En conclusión, se destaca la necesidad de fortalecer vínculos con actores locales para asumir un rol más activo en el proceso de formulación de políticas públicas.

Abstract |

This article examines the interaction between academia and society in the field of public policies, based on the university extension experience of the Department of Political Science at the University of the Republic. Through a documentary analysis of institutional agreements and contributions to public debate in the press between 2011 and 2022, a predominance of collaborations with government entities is identified. These collaborations show significant variations following the 2020 change in government, highlighting a reliance on the demand for expert knowledge and questioning the relationship between science and politics. Additionally, challenges are noted in expanding the discipline to include departmental and local actors. Contributions to public debate focus on relevant contextual events and are characterized by objective assessments. In conclusion, the article emphasizes the need to strengthen connections with local actors to take on a more active role in the public policy-making process.

Palabras clave |

políticas públicas; extensión universitaria; interacción academia-sociedad; ciencia y política.

keywords |

public policies; university extension; academia-society interaction; science and politics.



1. Introducción

Esta investigación parte de la premisa de que el conocimiento experto sobre políticas públicas es fundamental, tanto como aporte académico en sí mismo como insumo para la formulación de respuestas estatales a los problemas públicos. Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que ha diagnosticado el desarrollo y la evolución del campo de conocimientos dedicado al Estado y las políticas públicas en Uruguay, que ha crecido notablemente en las últimas décadas (Bentancur y Martínez, 2024; Bentancur, Milanesi y Martínez, 2023; Bentancur y Mancebo, 2013). Su aporte novedoso radica en que, mientras los estudios previos han destacado las dos funciones tradicionales de la vida académica –la enseñanza y la investigación–, este escrito aborda una dimensión hasta ahora desatendida: las actividades de extensión universitaria y el relacionamiento con el medio.

Aunque el área de conocimiento de las políticas públicas surgió como un proyecto intrínsecamente multi-interdisciplinario (Roth, 2016), su expansión en Uruguay ha estado estrechamente vinculada a la ciencia política. Por ello, este estudio se centra en el Departamento de Ciencia Política (DCP) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UdelaR), principal centro generador de este tipo de saberes en Uruguay (Rocha-Carpiuc, 2014).

La investigación se basa en un análisis de fuentes documentales y tiene como objetivo identificar y examinar las características principales de la producción y reproducción de conocimientos de la disciplina en relación con la sociedad durante la segunda década del siglo XXI.

La relevancia del estudio radica en la naturaleza cambiante del campo de las políticas públicas, cuya pertinencia ha variado con el tiempo. Por este motivo, un análisis introspectivo como el presente resulta útil para revitalizar su vigencia y aportes.

2. Encuadre teórico

La extensión universitaria tiene raíces profundas en las universidades latinoamericanas desde principios del siglo XX y, a través de diversas reformas, se ha institucionalizado progresivamente. En la Universidad de la República, el último proceso de transformación significativa comenzó en 2006, consolidando la extensión como una función esencial (Etchebere, 2014).¹ Debido a su importancia en el desarrollo

universitario, este artículo analiza cómo se implementa la extensión en el campo de conocimiento delimitado.

No existe consenso en la comunidad académica local sobre la definición de la extensión. Algunos autores sostienen que posee una especificidad propia –de carácter dialógico y relacional– que la convierte en una política universitaria en sí misma. Otros, en cambio, consideran que abarca diversas formas de relacionamiento con el entorno, como la difusión de investigaciones, los convenios de cooperación y la asistencia técnica, entre otros (Etchebere, 2014).

Para los fines de este trabajo, se adopta una definición amplia de extensión. Esta incluye actividades como paneles, cursos y mesas de discusión dirigidas a públicos no universitarios, proyectos de extensión con dinámicas propias –orientados a responder de manera interactiva a demandas sociales– y una dimensión más integrada con las demás funciones universitarias.

El estudio tiene como objetivo analizar la relación del Departamento de Ciencia Política con su entorno, centrándose en las actividades vinculadas al Estado y las políticas públicas. Los objetivos, el alcance, los actores involucrados y las estrategias empleadas para transferir el conocimiento universitario a la sociedad constituyen uno de los debates más relevantes y controvertidos en el ámbito de las políticas universitarias.

Como señalan Naidorf et al. (2007), la pertinencia social de la producción universitaria es un concepto en constante debate y transformación. Visibilizar la complejidad universitaria como espacio de producción y difusión de conocimientos con anclaje territorial resulta esencial, ya que permite evaluar cuán cercana está esta producción a las problemáticas locales (Oregioni, Avondet y Durán, 2023). Sin embargo, la extensión universitaria –al implicar una vinculación directa con el territorio– ha sido históricamente poco valorada por la ciencia hegemónica, que prioriza otros circuitos mainstream como criterio de “excelencia” (Beigel, 2018).

En el caso de los estudios sobre políticas públicas, analizar la conexión entre las acumulaciones intelectuales y su medio político y social adquiere particular relevancia. Este intercambio, cuando se formaliza, fomenta una lógica de compromiso de la comunidad académica con la resolución de problemáticas específicas. Así, se incorpo-

¹ Para conocer las etapas de la institucionalización de la extensión, ver Bralich (2006). En el caso de su historia en la Facultad de Ciencias Sociales, ver Etchebere (2014).

ran nuevas perspectivas a las agendas de investigación y se complementan los métodos de producción científica (Bianco et al., 2020). Estas características se alinean con los rasgos distintivos del campo de las políticas públicas, que se presentan a continuación.

En primer lugar, este campo pone un énfasis central en el contexto, ya que las problemáticas que aborda responden a procesos sociales, políticos y económicos específicos (Valenti y Flores, 2009). A diferencia de otras ciencias, no busca establecer leyes universales, sino generar un conocimiento útil y aplicado, profundamente enraizado en la experiencia (Del Castillo y Quintana, 2015). Este enfoque subraya la importancia de considerar cada situación de manera particular, en consonancia con la lógica del intercambio entre academia y sociedad que orienta esta investigación.

En segundo lugar, la diversidad metodológica es una característica distintiva de las ciencias de las políticas públicas. William Ascher destaca que el «eclecticismo analítico» permite emplear métodos cualitativos y cuantitativos de forma flexible, según las necesidades de cada caso (Del Castillo y Quintana, 2015). Este enfoque responde a la necesidad de adaptar las herramientas de investigación a problemas específicos y contextos particulares, reforzando la interacción entre la acumulación intelectual y el entorno social y político.

En esta línea, DeLeon (2008) subraya que muchos problemas sociales y políticos poseen múltiples componentes que trascienden los límites de una sola disciplina, lo que exige integrar diversas orientaciones para alcanzar una comprensión completa del fenómeno.

Por último, las políticas públicas se distinguen por su orientación explícita hacia la resolución de problemas, con el objetivo de generar conocimiento aplicable que tenga un impacto concreto (Valenti y Flores, 2009). Esta perspectiva práctica no descarta el análisis teórico, sino que lo complementa al abordar problemas reales que requieren tanto teorías como sistemas de información (Del Castillo y Quintana, 2015).

En este sentido, Lasswell (1992) enfatizó que el propósito no era desarrollar abstracciones elevadas, sino evaluar y reconstruir prácticas sociales para incrementar la racionalidad política (Aguilar-Villanueva, 2012). Así, las ciencias de las políticas públicas asumen un compromiso político con los valores democráticos y el fortalecimiento del Estado moderno (Mény y Thoenig, 1992, citado en Roth, 2017),

con el objetivo último de promover la dignidad humana tanto en el ámbito teórico como en el práctico.

Este imperativo adquiere especial relevancia en contextos latinoamericanos, donde los problemas urgentes demandan intervenciones estatales basadas en una comprensión profunda de las problemáticas locales (Bulcourn y Cardozo, 2008). En este escenario, el intercambio entre el conocimiento académico y la realidad político-social se convierte en un pilar fundamental para la producción de políticas públicas efectivas y contextualizadas.

En suma, la expansión del conocimiento en el ámbito de las políticas públicas y el doble rol del académico – como experto y ciudadano– no pueden comprenderse sin considerar los actores con los que interactúa, los roles asumidos y los productos resultantes de su relación con la sociedad. Para profundizar en este análisis, a continuación, se identifican una serie de categorías clave.

En primer lugar, los actores involucrados en proyectos que vinculan la academia con el entorno son diversos, e incluyen partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, agrupaciones vecinales e instituciones públicas. La participación de estos actores transforma la ciencia en un espacio interactivo, donde los saberes no se «derraman» desde la universidad, sino que se construyen colectivamente con la sociedad. Esta dinámica genera nuevas problemáticas y dimensiones de análisis, que adoptan un carácter colaborativo y adaptativo al responder a necesidades culturales, sociales y económicas específicas.

En segundo lugar, el rol desempeñado por los docentes e investigadores dentro de estas interacciones resulta crucial para comprender cómo se construye y comparte el conocimiento. Bandola-Gill (2019, citado en Alonso et al., 2022) identifica cuatro funciones principales que los académicos pueden asumir: el rol de «contestatario» –desafiar políticas vigentes y proponer nuevas formas de comprensión–; el rol de «aprendizaje», que fomenta la interacción y el aprendizaje mutuo entre actores con diferentes antecedentes sobre problemas de políticas públicas; el rol de «aportar evidencia», enfocado en producir investigaciones aplicables y colaborativas; y el rol de «promoción», orientado a impulsar políticas específicas. Estas funciones reflejan tanto la diversidad de enfoques que los académicos adoptan frente a los problemas públicos como el grado de implicación en el proceso de generación de conocimiento.

Por otro lado, los actores extraacadémicos también desempeñan un papel decisivo en esta dinámica. Según Goñi, Zeballos y Bianco (2021), pueden adoptar dos roles ideales: uno de colaboración, donde aportan datos, percepciones y referencias contextuales que enriquecen y ajustan las investigaciones, y otro de coproductores de conocimiento, participando activamente en todas las etapas del proceso investigativo. Esta interacción bidireccional fomenta una comunicación fluida y una retroalimentación constante entre la academia y la sociedad, lo que refuerza tanto la legitimidad como la aplicabilidad del conocimiento generado.

Un tercer aspecto a destacar es la iniciativa para establecer vínculos entre la academia y los actores extraacadémicos. Cohanoff, Mederos y Simón (2014, citado en Bianco et al., 2020) señalan que, en la mayoría de los casos, dicha iniciativa surge de la academia, evidenciando la limitada demanda directa de conocimiento por parte de los sectores productivos y otras entidades. Esto subraya la importancia de la proactividad de los docentes e investigadores para generar y sostener estas conexiones, planteando interrogantes sobre las estrategias necesarias para fortalecer la integración del conocimiento académico en los procesos de toma de decisiones y en el desarrollo social.

En quinto lugar, los productos o servicios derivados de la colaboración entre la academia y la sociedad constituyen un aspecto fundamental para su análisis. Estos resultados incluyen desde informes y asesorías técnicas hasta propuestas concretas para la formulación de políticas públicas. El estudio de estos productos permite comprender mejor las expectativas de la sociedad y las instituciones, así como evaluar la capacidad de los académicos para responder de manera efectiva a esas demandas. Además, facilita la reflexión sobre los impactos tangibles que estas colaboraciones generan, tanto a nivel local como en el desarrollo de políticas a mayor escala.

Finalmente, la participación de los académicos en el debate público puede considerarse una forma de extensión universitaria. A través de intervenciones en medios de comunicación, columnas de opinión o foros abiertos,

los docentes e investigadores informan a la ciudadanía, elevan el nivel de los debates y ofrecen insumos técnicos que facilitan la comprensión de temas complejos. Sus análisis de coyuntura contextualizan eventos y políticas actuales, proporcionando una perspectiva crítica y fundamentada que permite a la sociedad reflexionar sobre cuestiones clave.

Debido a la masividad y accesibilidad de estos medios para amplios sectores de la población, se propone observar los aportes de los académicos para identificar los temas más abordados, el alcance temporal de los análisis y el grado de «objetividad» en su participación en las discusiones públicas.² El objetivo final de esta investigación es esclarecer y categorizar de manera integral las actividades de extensión realizadas por los politólogos especializados en políticas públicas en relación con la sociedad civil, los gobiernos nacionales y departamentales, y otros actores clave del ámbito público y privado.

3. Metodología

La investigación adopta un enfoque de estudio de caso, ya que se centra en un análisis exhaustivo de una única unidad durante un período de tiempo determinado (Gerring, 2015). La unidad de análisis corresponde al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (DCP-FCS-UdelaR). Las unidades de observación comprenden los convenios institucionales establecidos por el DCP, así como las contribuciones de sus miembros en medios de comunicación, específicamente aquellas relacionadas con políticas públicas y pertinentes al objeto de estudio.³

El alcance temporal de la investigación abarca el período 2011-2022, justificado por la existencia de antecedentes que se desarrollan durante la primera década del siglo XXI (Bentancur y Mancebo, 2013). Este marco permite obtener información actualizada sobre la evolución del campo disciplinar en el Departamento.

La técnica aplicada consiste en el análisis de documentos institucionales, definidos como materiales producidos por el Departamento de Ciencia Política (DCP) o por individuos en la dimensión “institucionalizada de (su) vida”

² Se aplicará un análisis cuantitativo de sentimiento de los textos, procedimiento que será detallado más adelante.

³ El DCP cuenta con dos áreas de investigación dedicadas a este tema: “Estado y Políticas Públicas” y “Economía Política y Bienestar”. Estas áreas reúnen a 27 docentes especializados en la enseñanza e investigación sobre el Estado y las políticas públicas. Dos tercios de estos docentes han completado su formación de posgrado y se desempeñan bajo el régimen de dedicación exclusiva de la UdelaR, conocido en Uruguay como “dedicación total”. La mayoría obtuvo su título de posgrado en universidades de Uruguay o de la región, mientras que una quinta parte lo hizo en instituciones europeas, y solo dos en universidades de Estados Unidos o Canadá, según un análisis de sus currículums en el Sistema Nacional de Investigadores (Bentancur, Milanesi y Martínez, 2023).

(Corbetta, 2007). Según Rapley (2014), esta metodología resulta especialmente valiosa debido a su capacidad para ofrecer una visión amplia sobre las direcciones y trayectorias de la cultura y la práctica institucional.

El análisis se organiza en dos secciones. La primera examina y caracteriza los convenios institucionales establecidos por el DCP con actores extraacadémicos durante el período de estudio, siempre que estos se hayan enfocado en temas relacionados con el Estado y las políticas públicas. Para ello, se consultaron los registros de la Secretaría del Departamento, incluyendo convenios gestionados tanto a través de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) como mediante la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales.⁴

A partir del relevamiento, se obtuvo información sobre la cantidad de convenios establecidos a lo largo del tiempo, el origen de sus iniciativas, los productos o servicios generados y los roles desempeñados por los actores participantes. Además, se identificaron las áreas sectoriales más recurrentes.

En una segunda instancia, se recopilaron los aportes al debate público realizados a través de la prensa escrita. Para ello, se revisaron los currículum vitae de los docentes-investigadores y se complementó esta información con una búsqueda de sus publicaciones en los seis medios de mayor influencia en el país: *El Observador*, *El País*, *La Diaria*, *La República*, *Semanario Brecha* y *Semanario Búsqueda*. El análisis incluyó la frecuencia, el formato y el medio más utilizado, además del país de publicación, las temáticas tratadas, los casos abordados y el período temporal cubierto. Adicionalmente, se realizó un análisis de sentimiento sobre estas contribuciones.⁵

En síntesis, enfocar la investigación en las actividades de extensión permite no solo dimensionar y caracterizar cómo el entorno universitario interactúa y colabora con los procesos públicos fuera de sus instalaciones, sino también identificar deficiencias y proponer mejoras en las formas de vinculación con la comunidad.

4. Resultados

4.1 Convenios institucionales con actores extraacadémicos

Durante los doce años analizados, el Departamento de Ciencia Política concretó 70 convenios vinculados al Estado y las políticas públicas. Estos acuerdos abarcaron actividades como consultorías con organismos nacionales e internacionales, participaciones en medios de comunicación, acuerdos para prácticas educativas, financiamiento de investigaciones y organización de eventos académicos, como simposios y mesas redondas. La Figura 1 muestra que la evolución trienal refleja un aumento gradual en la concreción de estas iniciativas, tendencia que se revierte en el período 2020-2022.

Los convenios se clasificaron según el origen de la iniciativa, distinguiendo entre actores académicos y extraacadémicos. Como se planteó en la introducción, la academia suele liderar estas iniciativas debido a la limitada demanda directa de conocimiento por parte de sectores productivos y sociales (Cohanoff, Mederos y Simón, 2014, citado en Bianco et al., 2020). Sin embargo, el relevamiento revela que el 80 % de los convenios fue impulsado por actores extraacadémicos, lo que contrasta con lo señalado en investigaciones previas.

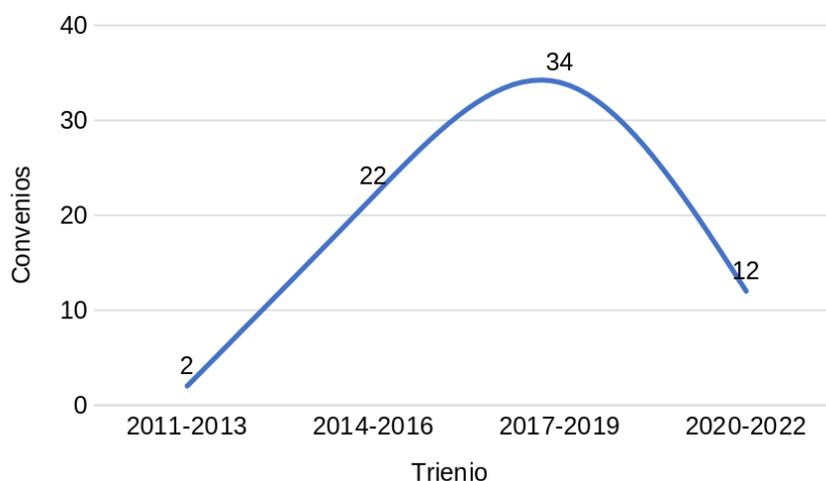
Este fenómeno se explica por las características del público demandante de conocimiento especializado. Organismos gubernamentales, tanto nacionales como departamentales, y entidades internacionales se encuentran en una posición ventajosa en términos de recursos y capacidad técnica, lo que les permite solicitar asistencia académica. En contraste, actores de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, colectivos territoriales e individuos no organizados, enfrentan mayores limitaciones en términos de recursos y agencia para demandar este tipo de colaboración técnica.

Además de analizar la iniciación de los convenios, es relevante comprender el rol que desempeñan los docentes-investigadores del Departamento de Ciencia Política (DCP) en estas relaciones. Siguiendo la clasificación propuesta por Bandola-Gill (2019, citado en Alonso et al., 2022), los roles se agrupan en cuatro categorías: contes-tatario, aprendizaje, aporte de evidencia y promoción.

⁴ Esta es una asociación civil sin fines de lucro legalmente constituida en 1998 con el motivo de apoyar a la Universidad de la República en la formulación, ejecución y administración de proyectos en áreas de interés común relacionadas con la enseñanza, formación investigadora, extensión y divulgación del conocimiento de las Ciencias Sociales.

⁵ Este es una técnica de procesamiento de lenguaje natural que se usa para determinar la actitud o sentimiento expresado en un texto (Alaminos-Fernández, 2023).

Figura 1. Evolución trienal de los convenios institucionales del DCP vinculados al Estado y las políticas públicas (2011-2022).



Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la Secretaría del DCP.

El análisis muestra que 6 de cada 10 participaciones académicas se centran en aportar evidencia. Este rol implica la producción de investigaciones orientadas a políticas, desarrolladas en colaboración con diversos actores, e incluye funciones de asesoría. En este contexto, los intelectuales utilizan su conocimiento especializado para ofrecer insumos a los actores extraacadémicos, limitándose a generar y presentar información sin involucrarse más profundamente en los procesos subsecuentes.

En segundo lugar, en 3 de cada 10 casos, los académicos del DCP asumen roles de aprendizaje. Estas situaciones se caracterizan por la interacción y el aprendizaje colectivo entre individuos con antecedentes diversos sobre problemas de políticas y prácticas. Este rol se manifiesta especialmente en tutorías de prácticas educativas, donde los docentes-investigadores supervisan a los estudiantes y actúan como enlace con las organizaciones receptoras. Esta supervisión incluye reuniones regulares con ambas partes y una colaboración continua durante el desarrollo del proyecto. Además, este rol se evidencia en actividades de capacitación, talleres y eventos académicos como mesas redondas, donde tanto los profesores como los actores involucrados participan en procesos de aprendizaje mutuo.

Finalmente, los roles de menor incidencia son el contestatario (6 %) y el de promoción (4 %). El rol contestatario se asocia con convenios orientados a consultorías cuyo objetivo es modificar el *status quo* de una política específica. Por su parte, el rol de promoción aparece en situaciones donde los académicos son contratados para

desarrollar investigaciones que ofrezcan opciones de políticas públicas.

Además de los roles desempeñados, los convenios generan diversos productos y servicios, entre los que destacan la participación en medios de comunicación, presentaciones en eventos o mesas redondas, cursos y formaciones, informes finales de pasantía, consultorías y asesorías, así como investigaciones y publicaciones.

En el 33 % de los casos, la principal actividad de los docentes-investigadores es la realización de investigaciones y publicaciones, lo que refleja su rol predominante de aportar evidencia. Esta actividad prioriza la producción de documentos, libros, *policy papers* y la ejecución de proyectos de investigación, consolidando su contribución al debate académico y a los procesos de toma de decisiones en políticas públicas.

En segundo lugar, con el 31 % de las frecuencias, destacan las consultorías y asesorías, que enfatizan la aplicación de conocimiento experto en actividades como evaluaciones, asesoramiento, asistencia técnica, elaboración de planes de trabajo y realización de entrevistas, entre otras.

En tercera posición, con el 21 % de las menciones cada uno, se ubican los informes finales de pasantía y los cursos o formaciones. Los informes finales de pasantía cumplen una función dual: actúan como trabajos de egreso para estudiantes de ciencia política y reflejan la supervisión de los docentes-investigadores. Por otro lado, los cursos y formaciones consisten en capacitaciones, talleres y actividades de sensibilización sobre diversos temas, diri-

Tabla 1. Actores extraacadémicos en los convenios institucionales del DCP vinculados al Estado y las políticas públicas (2011-2022).

Organización	Fr.	Organización	Fr.	Organización	Fr.	Organización	Fr.
MIDES	9	Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República	1	Policlínica Tiraparé	1	OSC	1
IM	5	MVOTMA	1	ANII	1	Congreso de Intendentes	1
CAF	4	Corte Electoral	1	MDN	1	PNUD	1
OPP	4	Embajada de Estados Unidos en Uruguay	1	CONAPROLE	1	TNU	1
MIEM	3	Plenario de Municipios	1	MERCOSUR	1	República AFAP	1
Fundación Konrad Adenauer	3	FPSICO	1	INACOOP	1	Búsqueda	1
INDDHH	3	MEC	1	MGAP	1	Defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo	1
INIA	2	ALETEA	1	INAU	1	Junta Nacional de Drogas	1
IMC	2	Asociación de Sordos del Uruguay	1	BCU	1	Intendencia de Maldonado	1
MEVIR	2	Grupo La Esperanza	1	UNICEF	1	Junta Departamental de Montevideo	1
ANEP	2	OPS	1	BID	1	AGESIC	1
UNFPA	2	IICA	1	Universidad ORT	1	INEFOP	1
Total general							77

Fuente: Elaboración propia en base a los convenios institucionales.

gidos principalmente a funcionarios públicos, políticos y trabajadores de las instituciones conveniadas.

De forma marginal, se identifican la participación en simposios, eventos y mesas redondas (4 %), así como en medios de comunicación (3 %). La menor frecuencia de estos formatos se explica por su naturaleza menos formal y por no requerir generalmente la estructura y formalidad asociadas a los convenios relevados en este estudio.

La Tabla 1 desglosa las organizaciones involucradas en los convenios establecidos, registrando un total de 77 entidades. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) lidera la lista con 9 convenios, seguido por la Intendencia de Montevideo (IM) con 5 convenios. En tercer lugar, con 4 convenios cada uno, se ubican el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP).

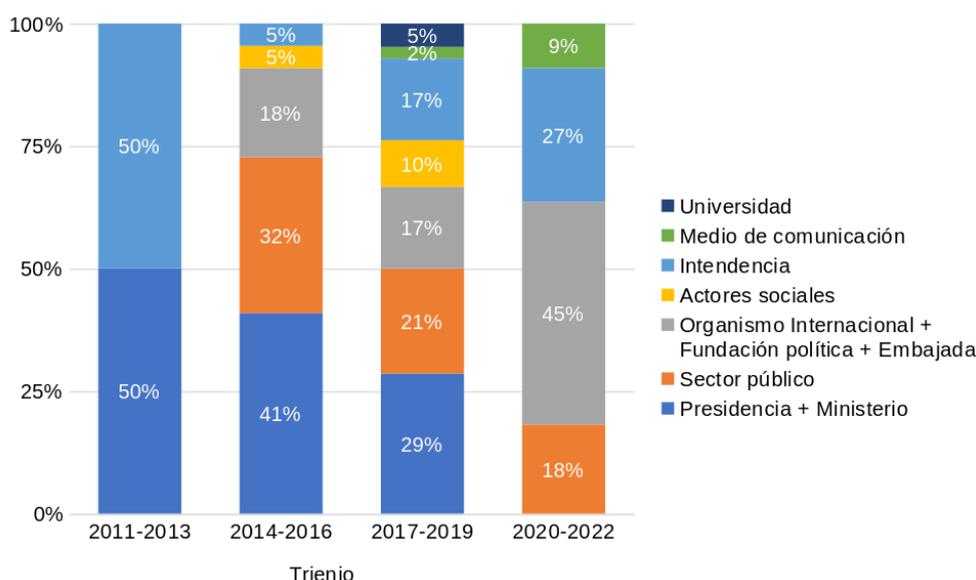
Entre las organizaciones que participaron en tres convenios figuran el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Fundación Konrad Adenauer y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Otras entidades relevantes, con dos convenios cada una, incluyen al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Intendencia de Canelones (IMC), la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda

Rural Insalubre (MEVIR), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El listado también integra una amplia gama de organizaciones con un único convenio. Estas van desde instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), hasta organismos internacionales como la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, se destacan asociaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Sordos del Uruguay, reflejando la diversidad de actores vinculados en estos convenios.

Es importante destacar la inclusión de entidades académicas y de investigación, como la Universidad ORT y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto a instituciones del sector privado, como CONAPROLE y República AFAP. Esta variedad evidencia la amplitud de colaboraciones establecidas, que abarcan múltiples áreas de interés y acción. La presencia de actores de diversos sectores resalta el carácter interdisciplinario y

Figura 2. Evolución trienal del tipo de actores extraacadémicos en los convenios institucionales del DCP vinculados al Estado y



Fuente: Elaboración propia en base a los convenios institucionales.

multifacético de los convenios, permitiendo al Departamento de Ciencia Política ampliar su impacto más allá del ámbito académico y fortalecer su vinculación con el entorno social y productivo.

El análisis revela que el 62% de los convenios fueron suscritos con actores del nivel nacional, seguidos por un 21% con actores internacionales, un 13% con actores departamentales y un 4% con actores locales. En términos de clasificación, el sector público nacional encabeza las asociaciones con un 23%, mientras que los ministerios representan un 22%. Las intendencias y los organismos internacionales comparten un 16% de los convenios. Por su parte, las oficinas dependientes de la Presidencia de la República y otros actores sociales tienen una participación menor, limitada al 6% de los casos cada uno.

Además de su distribución general, resulta relevante analizar la evolución temporal de la participación de estos actores. La Figura 2 proporciona una perspectiva visual de las tendencias en los tipos de actores con los que el Departamento de Ciencia Política ha establecido vínculos a lo largo del período de estudio.

Un primer hallazgo relevante es que los convenios con la Presidencia de la República y los distintos ministerios tuvieron una relevancia considerable entre 2011 y 2019,

siendo los más frecuentes en cada trienio. Sin embargo, a partir de 2020, estos convenios desaparecieron. Este patrón puede explicarse mediante el concepto de *Régimen Político de Conocimiento* propuesto por Garcé (2014, 2023), quien enfatiza el estudio de la demanda de conocimiento experto por parte de los responsables de políticas públicas.

En su artículo, Garcé (2023: 67) señala que “como en otros países, la academia uruguaya está más cerca de la izquierda que de la derecha”. Por lo tanto, la desaparición de convenios con el gobierno a partir de 2020 podría interpretarse como consecuencia del cambio en el partido gobernante.

Este panorama plantea la interrogante sobre la demanda de conocimiento experto por parte del Estado durante la administración del centroderechista Partido Nacional y/o los miembros de la Coalición Republicana.⁶ Una hipótesis inicial sugiere que dicha demanda podría haberse reducido. No obstante, una explicación más plausible apunta a que esta demanda estaría siendo atendida por entidades privadas u otros centros de conocimiento (Garcé, 2023).⁷

En línea con esta reflexión, los convenios con gobiernos departamentales se concentran mayoritariamente en las administraciones de Montevideo y Canelones, gestiona-

⁶ Anteriormente denominada Coalición Multicolor.

⁷ Un caso de notorio conocimiento que abona a esta segunda hipótesis es la participación de calificados académicos de universidades privadas en la gestión educativa de la actual administración.

Tabla 2. *Arena sectorial en los convenios institucionales del DCP vinculados al Estado y las políticas públicas (2011-2022).*

<i>Arena sectorial</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Administración Pública, Gestión y Gobernanza	13	19%
Descentralización y Desarrollo Territorial	9	13%
Innovación y Acceso a la Información	3	4%
Políticas Económicas y de Desarrollo	9	13%
Políticas Sectoriales Específicas	9	13%
Políticas Sociales y Derechos Humanos	22	31%
Políticas de Seguridad, de Defensa y Exterior	4	6%
Sin Especificar	1	1%
Total general	70	100%

Fuente: *Elaboración propia en base a los convenios institucionales.*

das por el partido de centroizquierda Frente Amplio. La única excepción es un convenio establecido con la intendencia de Maldonado, también bajo una administración frenteamplista en 2012.

Además de la influencia del signo político de los gobiernos, desde 2017 el Departamento de Ciencia Política (DCP) ha diversificado las organizaciones con las que colabora. Este cambio incluye un mayor involucramiento con entidades del ámbito social, organismos internacionales y medios de comunicación, ampliando su campo de interacción y fortaleciendo sus vínculos institucionales.

Un análisis de los convenios revela el rol desempeñado por los actores extraacadémicos, clasificados según los tipos ideales propuestos por Goñi et al. (2021): **colaboración y coproducción de conocimiento**. En el 60% de los convenios relacionados con el área temática del Estado y las políticas públicas, estos actores adoptan un rol colaborativo. En tales casos, aportan datos contextuales, percepciones y referencias circunstanciales. Esta dinámica refleja que los investigadores tienden a centrarse en la provisión de evidencia, el asesoramiento y la producción de investigaciones y publicaciones. Las organizaciones contratantes generalmente financian estos servicios o actúan como receptores de la experiencia académica, pero su participación en el proceso se limita a la recepción de resultados.

En el 40% restante de los convenios, los actores extraacadémicos participan activamente en la creación de conocimiento. En estos casos, la extensión del conocimiento se desarrolla de manera interactiva, caracterizada por una comunicación bidireccional. Ejemplos destacados incluyen las prácticas educativas, donde las instituciones receptoras de los estudiantes asumen un rol central, las capacitaciones y talleres de sensibilización, y las colaboraciones entre equipos técnicos institucionales

y consultores externos. Este enfoque fomenta un intercambio enriquecedor que trasciende la transferencia unidireccional de conocimiento.

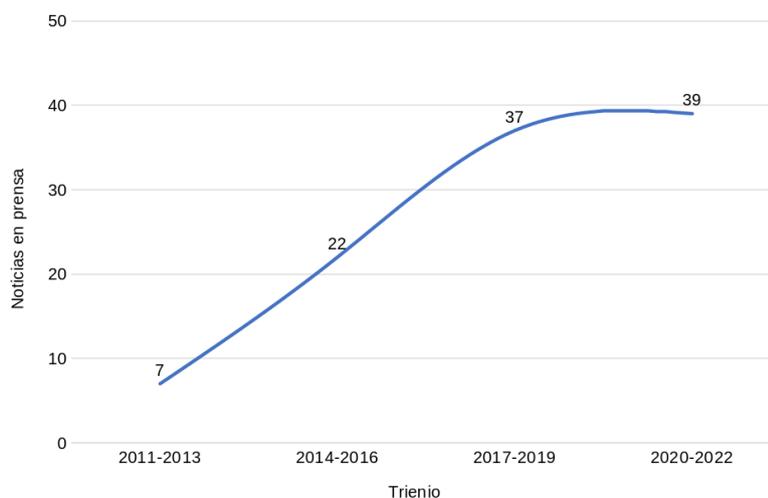
Es importante subrayar que, aunque los casos de coproducción de conocimiento representan una proporción minoritaria, su presencia resulta significativa. Este hecho evidencia la alta cualificación de los actores y organizaciones involucrados en los convenios, una característica distintiva de esta área disciplinaria.

La Tabla 2 detalla la distribución del ámbito sectorial en los convenios institucionales del Departamento de Ciencia Política (DCP) durante el período 2011-2022. Las áreas de mayor frecuencia corresponden a Políticas Sociales y Derechos Humanos, que abarcan el 31% del total, seguidas por Administración Pública, Gestión y Gobernanza, con un 19%.

Otras temáticas relevantes incluyen Políticas Económicas y de Desarrollo, Descentralización y Desarrollo Territorial, y otras Políticas Sectoriales Específicas, cada una con una participación del 13%. En contraste, áreas como Innovación y Acceso a la Información y Políticas de Seguridad, de Defensa y Exterior registran una menor frecuencia, reflejándose en porcentajes inferiores.

4.2 Aportes al debate público en medios de prensa escrita

Como se indicó al inicio, una parte esencial de las actividades de extensión y vinculación con el medio consiste en los aportes al debate público realizados por los académicos mediante su participación en los medios de comunicación. Caracterizar esta faceta de su labor resulta relevante, ya que permite identificar cómo los académicos ofrecen soluciones prácticas e innovadoras a los problemas sociales a partir de su conocimiento especializado. Además, sus opiniones contribuyen a elevar el nivel de conciencia y comprensión del público general, aumentando la visibilidad y legitimidad de la disciplina politológica.

Figura 3. Evolución trienal de los aportes al debate público en prensa escrita de los miembros de las áreas de políticas públicas

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes en prensa escrita.

El análisis se centró exclusivamente en la prensa escrita por dos motivos. Primero, este medio facilita un análisis descriptivo y de contenido de las contribuciones de los investigadores. Segundo, sus registros son fácilmente accesibles.⁸

El recuento de noticias identificó un total de 105 publicaciones en prensa realizadas por docentes-investigadores en áreas de políticas públicas. Se observó un incremento periódico en estas contribuciones, que se estabilizó en el último trienio (Figura 3).

En relación con los formatos de divulgación utilizados, los periódicos predominan como el medio preferido, representando el 84% de las publicaciones, seguidos por los semanarios con un 9% y las revistas con un 8%. Además, nueve de cada diez notas se publicaron en medios del territorio nacional (Tabla 3).

Entre los medios con mayor colaboración destacan dos grandes periódicos nacionales. El Observador ocupa la primera posición con el 41% de las publicaciones. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela, ya que se explica por la participación recurrente de un docente-investigador como columnista de análisis político, quien firma todas las notas en dicho medio.

En contraste, La Diaria, que se posiciona en segundo lugar con el 38%, puede considerarse el medio preferido por los docentes-investigadores para difundir sus escri-

tos. En tercera y cuarta posición aparecen los semanarios Brecha y Búsqueda, con un 5% y un 4% de las publicaciones, respectivamente (Tabla 3).

Más allá de su cuantificación, resulta esencial analizar el contenido que los académicos abordan en la prensa. La mayoría de los escritos describe, explica u opina sobre fenómenos ocurridos en los últimos cinco años, lo que se clasifica como de alcance coyuntural. Estos aportes no solo destacan por su proximidad temporal, sino también geográfica, ya que ocho de cada diez casos se refieren a eventos sucedidos en Uruguay.

En términos regionales, los países vecinos ocupan un lugar secundario: Argentina (4%), Brasil (4%) y Chile (3%), junto con la región latinoamericana en su conjunto (3%). A nivel global, se destacan referencias a Estados Unidos (2%), los países nórdicos (1%) y los tigres asiáticos (1%).

Respecto a las temáticas abordadas, las políticas educativas (18%) y el análisis general de políticas públicas (17%) son las más frecuentes, como se observa en la Tabla 4. En el caso de las políticas educativas, destacan los cambios introducidos por las administraciones del Frente Amplio, las reacciones a los informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) y, más recientemente, la propuesta del grupo de expertos EDUY21 y la actual «transformación educativa».⁹

En cuanto al análisis de políticas públicas, los aportes

⁸ Se incluyeron en el relevamiento tanto los artículos escritos por los propios académicos como las entrevistas exclusivas realizadas a ellos. Este criterio implicó la exclusión de referencias periodísticas a sus trabajos u opiniones, sin una participación directa del investigador en la creación de la nota.

⁹ Reforma educativa implementada por la actual administración de gobierno.

Tabla 3. *Formatos y destinos de los aportes al debate público en prensa escrita de los miembros de las áreas de políticas públicas del DCP (2011-2022).*

		<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Formato	Periódico	88	84%
	Semanario	9	9%
	Revista	8	8%
País de publicación	Uruguay	96	91%
	Australia	3	3%
	Argentina	2	2%
	España	2	2%
	Brasil	1	1%
	Varios países	1	1%
Medio	El Observador	43	41%
	La Diaria	40	38%
	Brecha	5	5%
	Búsqueda	4	4%
	Otros	13	12%
Total general		105	100%

Fuente: *Elaboración propia en base a los aportes en prensa escrita.*

se centran en columnas que evalúan la gestión gubernamental en períodos específicos. Otros temas relevantes incluyen la política económica (7%), con énfasis en las crisis de los países vecinos y los retos macroeconómicos nacionales, así como la gestión de la pandemia (7%) durante 2020 y 2021.

En un tercer nivel de importancia, destacan las reflexiones sobre la política previsional (6%), la política de defensa (6%), las políticas sociales, la administración pública y el análisis general del Estado, con un 5% cada uno.

En síntesis, los aportes realizados a través de estos espacios de divulgación se caracterizan por ofrecer reflexiones fundamentadas sobre los principales acontecimientos de la vida pública en Uruguay. Estas contribuciones proporcionan a la ciudadanía una comprensión informada y enmarcada en el ámbito de la politología sobre el contexto actual.

La última reflexión de esta sección aborda las características del Régimen Político de Conocimiento en Uruguay. Según Garcé (2023), en el ámbito político partidario persiste la percepción de que el conocimiento científico neutral carece de relevancia política o incluso es inexistente en el país.

Esta percepción también se evidencia entre los miembros del Departamento de Ciencias Políticas (DCP). Bentancur (2024) destaca que, aunque los investigadores aspiran a que sus resultados contribuyan a la resolución de problemas públicos, no consideran que sus aportes sean aprovechados de manera óptima. Asimismo, un

porcentaje significativo percibe cierta desconfianza por parte de los partidos políticos hacia la imparcialidad de sus trabajos.

Con la convicción de la importancia de los aportes realizados por los docentes-investigadores de una universidad pública como la Universidad de la República (UdelaR), y específicamente de una unidad académica especializada en temas políticos y sociales como el DCP, se llevó a cabo un análisis de sentimiento de sus contribuciones al debate público registradas en la prensa. Este análisis busca aproximarse al grado de «objetividad» con el que participan en dichas discusiones.

El análisis de sentimiento es una técnica de procesamiento de lenguaje natural utilizada para identificar la actitud o el sentimiento expresado en un texto, ya sea positivo, negativo o neutro (Alaminos-Fernández, 2023). En el ámbito político, esta herramienta se aplica para examinar tweets durante campañas electorales, discursos y comunicados políticos, así como para analizar las personalidades de los candidatos presidenciales, entre otros usos (Fernández-Cabana et al., 2014).

La estrategia de análisis cuantitativo se basa en la premisa de que las palabras empleadas al comunicarse aportan información más allá de su significado literal o del contexto semántico. La selección léxica revela aspectos como la identidad del hablante, su audiencia, el contexto de comunicación y sus motivaciones (Pennebaker et al., 2003, citado en Fernández-Cabana et al., 2014). Este análisis se realizó utilizando el diccionario en español del

Tabla 4. Temática de los aportes al debate público en prensa escrita de los miembros de las áreas de políticas públicas del DCP (2011-2022).

Tema	Frecuencia	Porcentaje	Tema	Frecuencia	Porcentaje
Política educativa	19	18%	Descentralización	2	2%
Análisis político general (vinculado a PP)	18	17%	Política de seguridad	2	2%
Política económica	7	7%	Política ambiental	2	2%
Gestión de pandemia	7	7%	Políticas de juventud	1	1%
Política previsional	6	6%	Política comercial	1	1%
Política de defensa	6	6%	Política de vivienda	1	1%
Políticas sociales	5	5%	Justicia	1	1%
Administración pública	5	5%	(In)Equidad por ascendencia étnica	1	1%
Análisis político general (vinculado a Estado)	5	5%	Nepotismo	1	1%
Demografía	3	3%	(In)Equidad entre familias	1	1%
Política sanitaria	3	3%	(In)Equidad de género	1	1%
Política exterior	3	3%	Política migratoria	1	1%
Gobernanza	3	3%	Total general	105	100%

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes en prensa escrita.

Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), implementado a través del software R Studio.¹⁰

Las notas de prensa fueron clasificadas según su fecha de publicación en dos periodos: los gobiernos del Frente Amplio (2011-2019) y del Partido Nacional (2020-2022). Además, se seleccionaron únicamente aquellas notas cuyo alcance temporal fuera coyuntural, asegurando que los sucesos analizados ocurrieran bajo una de estas administraciones. De este subconjunto, se identificaron 48 notas publicadas durante el gobierno del Frente Amplio y 17 durante la administración del Partido Nacional, sumando un total de 65 piezas.¹¹

Los resultados del análisis muestran que, en términos generales, el sentimiento de los docentes-investigadores al analizar la coyuntura es positivo, lo que indica que emplean apreciaciones de connotación favorable. En cuanto a la «ecuanimidad» de sus aportes, destaca que las proporciones de palabras negativas y positivas están equilibradas tanto durante los gobiernos del FA como del PN. Esto sugiere que la «tonalidad» con la que se reseñan

los sucesos tiende a ser uniforme, sin importar el partido en el poder (Tabla 5).

Este hallazgo resalta el rigor y la responsabilidad con los que los docentes-investigadores de las áreas del DCP contribuyen al debate público, lo que debería ayudar a mitigar ciertos prejuicios sobre los sesgos de la academia. No obstante, es importante señalar que este análisis es solo una aproximación, y que se requieren estudios más específicos para profundizar en la comprensión de la relación entre ciencia y política.¹²

5. Conclusiones

A lo largo de este estudio, se ha demostrado que el Departamento de Ciencia Política (DCP) ha realizado una cantidad significativa de actividades con actores extraacadémicos en materia de políticas públicas, consolidando vínculos con entidades gubernamentales, organismos internacionales, medios de comunicación y una variedad de organizaciones sociales. Esta vasta colaboración se alinea con el cometido histórico del campo de actuar como mediador entre la

¹⁰ El programa, desarrollado por Pennebaker, Francis y Booth en 2001, se utiliza para evaluar textos desde una perspectiva cognitiva y emocional, empleando diversas categorías psicológicas y estructurales. Este programa examina los textos palabra por palabra, clasificándolos en 72 variables lingüísticas. Estas variables abarcan categorías de lenguaje estándar (como artículos y pronombres), procesos psicológicos (emociones positivas y negativas, variables cognitivas), palabras relacionadas con la relatividad (tiempo y espacio) y dimensiones tradicionales de contenido (trabajo, dinero, logro), todas organizadas de manera jerárquica. Los resultados del análisis se presentan en forma de porcentajes de uso de cada categoría (Fernández-Cabana, Rúas-Araújo y Alves-Pérez, 2014).

¹¹ El período de análisis incluye cuatro años de la administración del presidente Mujica (FA), la totalidad de la segunda gestión del presidente Vázquez (FA), y los primeros tres años del actual presidente Lacalle Pou (PN). No hay notas de prensa previas a 1ero de marzo de 2020, momento en el que se da el cambio de gobierno.

¹² Es relevante recalcar que, aunque la «neutralidad» en las notas de prensa se considera una virtud debido a la ausencia de sesgo partidista, esta es particularmente deseable en un contexto como el uruguayo. La competencia partidaria nacional se ubica en el centro del espectro ideológico, y la toma de decisiones se realiza en un marco republicano y de respeto al Estado de derecho. Éticamente, sería incorrecto proponer que los aportes de los científicos deban mantener un tono «imparcial» ante situaciones más hostiles, como podrían ser escenarios de violación a los derechos humanos o de erosión al régimen democrático.

Tabla 5. Análisis de sentimiento de los aportes al debate público en prensa escrita de los miembros de las áreas de políticas públicas del DCP (2011-2022).

Partido en el gobierno	Emociones negativas		Emociones positivas		Sentimiento general	n
	Frec	%	Frec	%		
FA	596	32%	1294	68%	Positivo	48
PN	256	31%	583	69%	Positivo	17

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes en prensa escrita.

academia, los tomadores de decisiones y la ciudadanía (De-Leon, 2008).

Un primer hallazgo fue el amplio repertorio de productos y servicios que el cuerpo docente-investigador del DCP ofrece: investigaciones, asesorías, consultorías, cursos, participación en medios, informes de pasantías y presentaciones en diversos foros. Esto demuestra el potencial de la ciencia política como herramienta para el desarrollo social. También se constató una amplia diversidad temática en la que se establecen los vínculos. Las áreas protagonistas de estos fueron las políticas sociales, educativas, económicas y de desarrollo, de seguridad, defensa y exterior. En asuntos más cercanos al Estado, destacaron temas como la gestión y administración pública, la gobernanza, la descentralización y el desarrollo territorial.

En segundo lugar, se destacó la persistente dificultad para nacionalizar la disciplina, ya que la gran mayoría de los convenios se han concentrado en la capital del país. Las escasas instancias fuera de Montevideo se han concentrado principalmente en Canelones y Maldonado. Asimismo, cabe mencionar que, en muchos casos, los convenios con organismos supranacionales financian actividades realizadas en diferentes lugares del territorio nacional. Sin embargo, una interacción más directa con actores subnacionales podría generar un conocimiento más contextualizado y ajustado a las realidades locales.

Otro aspecto destacable es que, en la mayoría de los casos, los docentes-investigadores actuaron como proveedores de evidencia, ya sea a través de investigaciones o formaciones. A tal efecto, su participación se evalúa en gran medida como instrumental, lo que coincide con lo que Garcé (2014) denominó como el “plebeyismo” del Régimen Político de Conocimiento en Uruguay, donde los expertos contribuyen, pero sin integrarse plenamente en las dinámicas decisionales.

Al respecto, merece la pena retomar los aportes de Gluckman (2018), quien sostiene que la dinámica entre ciencia y política está condicionada por las diferencias

(en métodos y epistemologías) de sus culturas. En este sentido, los académicos que busquen incidir en el *policy process* deben procurar ser diplomáticos, tener iniciativa política y generar una comunicación efectiva orientada a diversos públicos: los políticos y los responsables de las políticas, pero también al público en general, los medios de comunicación y el resto de la comunidad científica.

Un cuarto hallazgo a destacar fue la preponderancia de los vínculos establecidos con actores de nivel nacional. Si bien es comprensible que la interlocución con actores se dé principalmente en dicho nivel, existe un amplio margen para que el DCP amplíe su participación a nivel departamental y local. El fortalecimiento de estos lazos no solo permitiría una comprensión más profunda del territorio, sino que también contribuiría a potenciar la agencia de estos actores, especialmente en contextos donde la demanda de experticia es limitada o incipiente. En estos casos, los académicos pueden asumir un rol más proactivo, ayudando a identificar y priorizar problemas, traducir demandas abstractas en propuestas concretas y fomentar dinámicas participativas con un enfoque ascendente (*bottom-up*).

En concordancia, se observó una predominancia de agentes y funcionarios del Estado entre los actores extraacadémicos involucrados, así como que la mayoría de las instancias de coproducción de conocimiento corresponden a pasantías estudiantiles. Esto refleja una tendencia a colaborar con actores altamente calificados y un potencial limitado para transformar demandas abstractas en agendas endógenas (Oregioni, Avondet y Durán, 2023), lo cual sería más probable si el público asociado tuviera un perfil social.

Finalmente, se constató una variación considerable a lo largo del tiempo en los convenios, especialmente con algunos organismos gubernamentales, como la Presidencia de la República y los ministerios. La desaparición de estos desde 2020 resalta la importancia de la demanda como un componente clave del Régimen Político de Conocimiento (Garcé, 2014). De igual forma, evidencia

la influencia de las ventanas de oportunidad (Kingdon, 1984) sobre la fuerza de la relación entre la academia y el Estado. Estas se abren cuando las demandas gubernamentales coinciden con la oferta de conocimiento académico y un entorno político alineado con la incorporación del mismo. La experiencia de los últimos años indica una disminución temporal de estas oportunidades.

A continuación, se plantean algunas reflexiones sobre el caso analizado y posibles líneas de trabajo a futuro:

- i. *Dado que el leitmotiv de este campo disciplinar es la resolución de los problemas sociales, tanto en el plano teórico como práctico, fomentar la vinculación con el medio es una prioridad indiscutible.*

Para lograrlo, es necesario generar incentivos dentro de la carrera docente que favorezcan estos desarrollos en dos sentidos. Por un lado, se requiere jerarquizar el rol de la extensión dentro del conjunto de funciones universitarias. A pesar de los esfuerzos hacia la integralidad de estas, la extensión ha sido históricamente subestimada por la ciencia hegemónica (Beigel, 2018) y ha recibido una baja ponderación en los mecanismos de evaluación docente de la UdelaR (Ferrigno et al., 2014). La propia FCS ha reconocido que la participación de los docentes en actividades con el medio es limitada, ya que la mayoría de los docentes dedica sus horas principalmente a la investigación y la enseñanza (Ferrigno et al., 2014).

Más aún, la creciente lógica de productividad académica, que incentiva a centrarse en actividades más valoradas en términos de mérito, como las publicaciones investigativas, especialmente aquellas en el extranjero y en inglés en sitios «prestigiosos», plantea desafíos para mantener la relevancia local y una identidad académica propia.

Por ello, se considera que fortalecer las líneas de financiamiento para la extensión universitaria y equilibrar las ponderaciones en las evaluaciones docentes son medidas clave para fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad. La pregunta clave radicará en cómo trazar un camino propio que evite tanto la asimilación extrema como una desconexión que comprometa su relevancia.

Por otro lado, es necesario fomentar el desarrollo de perfiles más eclécticos: académicos que trabajen en la esfera extraacadémica y viceversa. Estas figuras podrían actuar como vasos vinculantes entre ambos ámbitos, mejorando así el vínculo entre ellos. Este enfoque es clave, ya que lo que realmente parece importante es la capacidad de conocerse mutuamente y mantener un vínculo lo

suficientemente fluido y continuo para saber a qué político o experto llamar cuando sea necesario (Oliver, Money y de Vocht, 2013, citado en Cairney et al., 2016).

Una vinculación más estrecha podría ser beneficiosa de dos maneras: por un lado, reduciría la volatilidad de la demanda de conocimiento experto; y, por otro, podría contrarrestar su utilización instrumental, involucrando a los académicos de manera más activa en los procesos de formulación de políticas.

No obstante, el enfoque aquí propuesto no promueve la delegación de la toma de decisiones a los técnicos o expertos, ni cae en el reduccionismo de considerar que la misma puede ser completamente neutral. Como señala Pielke (2007), la toma de decisiones está inherentemente vinculada a una concepción normativa del mundo y a una visión sobre los resultados deseados.

- ii. *Es esencial que el DCP continúe diversificando sus vínculos con actores extraacadémicos para evitar una dependencia excesiva de la demanda de asistencia por parte del partido en el poder.*

Además, sería conveniente fortalecer la proximidad con el territorio, ya que esta cercanía favorecería una mayor comprensión de las problemáticas locales. Aunque la experiencia sugiere que, de manera paradójica, a veces es más fácil establecer vínculos con actores extranjeros que con compatriotas, la comunidad científica deberá explorar formas innovadoras para superar las limitaciones que obstaculizan estas colaboraciones. Esto implicará desarrollar estrategias que aborden tanto la oferta (financiamiento, incentivos académicos, reconocimiento profesional) como la demanda (falta de agencia y recursos limitados de los actores sociales para expresar sus necesidades).

- iii. *La incidencia de la academia en las políticas públicas es un tema relevante y merece nuestra atención, pero es importante reconocer que no es tan sencillo de lograr como podría parecer a primera vista.*

Como señalan Cairney et al. (2016), las relaciones entre académicos y responsables de políticas no se construyen de la noche a la mañana ni pueden ser impuestas de manera superficial, como en talleres ocasionales o actividades puntuales. En un sistema complejo de toma de decisiones, no tiene mucho sentido buscar ejemplos aislados de influencia académica, ni esperar que su impacto sea inmediato o fácil de medir. Así que, si bien esto no nos exime de seguir buscando maneras de promover un compromiso más efectivo y sostenido, es fundamental ser realistas sobre los desafíos

que implica y evitar esperar soluciones rápidas o simples.

- iv. *Este trabajo señala dos líneas de investigación futura que merecen consideración.*

En primer lugar, resulta relevante explorar la conexión entre ciencia y política en Uruguay, particularmente en lo que respecta a la percepción de cercanía entre la academia pública y sectores ideológicos específicos, así como sus posibles implicancias. Vale la pena resaltar que la mayoría de los profesores del DCP identifica cierta desconfianza hacia la imparcialidad de sus aportes, especialmente por parte de los partidos políticos (Bentancur, 2024).

En segundo lugar, es necesario reflexionar sobre la influencia efectiva que ejerce la academia en la toma de decisiones, considerando los factores que pueden condicionarla. Aspectos como la relevancia práctica del conocimiento producido, la capacidad de los académicos para comunicar sus hallazgos de manera accesible, el nivel de confianza y legitimidad atribuido a la ciencia, y la apertura de los tomadores de decisiones a incorporar evidencia en sus procesos son elementos clave.

Aunque esta investigación se ha centrado en explorar el enfoque académico de la relación, es fundamental evaluar cómo estos —y otros— factores inciden en el impacto concreto de la ciencia en la formulación de políticas. Un análisis de esta naturaleza requerirá recuperar las percepciones de autoridades políticas y del cuerpo burocrático en diferentes niveles del aparato estatal.

A modo de conclusión, este estudio proporciona varias perspectivas sobre los lazos entre la academia y los actores extraacadémicos en el ámbito de las políticas públicas. Al explorar la interacción entre ambas esferas, se resalta el potencial de las universidades para influir en los procesos políticos y sociales. Del mismo modo, el análisis pone de relieve los factores que condicionan esta relación e invita a profundizar en estrategias que fortalezcan esta sinergia. Los hallazgos aspiran a servir como referencia para futuros estudios sobre la conexión entre ciencia y política, así como a contribuir al diseño de políticas universitarias que promuevan una colaboración más estrecha y efectiva entre estos dos mundos.

6. Agradecimientos

La investigación que da origen a los resultados presentados en la presente publicación recibió fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación bajo el código POS_NAC_2021_1_169744.

7. Referencias

- Aguilar-Villanueva, L. (2012).** Política Pública: Una visión panorámica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Alaminos-Fernández, A. (2023).** Introducción a la minería de texto y análisis de sentimiento con R. Universidad de Alicante. Obets Ciencia Abierta.
- Alonso, M., Perrotta, D., & Ricino, G. (2022).** ¿Ayudar al Estado a pensar? Sobre las dinámicas de interacción entre la investigación social y la política. *Analecta Política*, 12(23), 01–26. <https://doi.org/10.18566/apolit.v12n23.a06>
- Beigel, F. (2018).** Las relaciones de poder en la ciencia mundial. Un anti-ranking para conocer la ciencia producida en la periferia nueva. *Revista Nueva Sociedad*, 274, 14–28.
- Bentancur, M. (2024).** Percepciones de los investigadores e investigadoras del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar (FCS-Udelar) sobre el uso del conocimiento que producen para la resolución de problemas públicos (No. 6; Documento de Trabajo de CiTINDe). Udelar.
- Bentancur, N., & Mancebo, M. (2013).** Pensando lo público: Los desarrollos de la Ciencia Política sobre Estado y Políticas Públicas en Uruguay (1987-2012). *Revista Debates*, 7(3), 9–30.
- Bentancur, N., & Martínez, R. (2024).** Estado y políticas públicas: Génesis, evolución y perspectivas de desarrollo de la enseñanza y la investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Udelar. En A. Garcé & C. Rocha-Carpiuc (Eds.), *Política y Ciencia Política en Uruguay* (pp. 153–178). Taurus - Política / Penguin Random House Uruguay.
- Bentancur, N., Milanesi, A., & Martínez, R. (2023).** El campo de estudio del Estado y las Políticas Públicas en Uruguay. *Estado y Políticas Públicas*, 10(20), 43–74.
- Bianco, M., Goñi, M., Robaina, S., Waiter, A., & Zeballos, C. (2020).** En agenda: Una exploración de motivaciones, influencias y prácticas académicas. Informe de encuesta a investigadores en Uruguay (Serie Documentos de Trabajo de CSIC).
- Bralich, J. (2006).** La extensión universitaria en el Uruguay. Antecedentes y desarrollo en la Universidad de la República desde sus inicios hasta 1996. CSEAM – SCEAM, Udelar.
- Bulcourn, P., & Cardozo, N. (2008).** ¿Por qué comparar políticas públicas? En *Documentos de Política Comparada* (Vol. 4).
- Cairney, P., Oliver, K., & Wellstead, A. (2016).** To Bridge the Divide between Evidence and Policy: Reduce Ambiguity as

- Much as Uncertainty. *Public Administration Review*, 76(3), 399–402. <https://doi.org/10.1111/puar.12555>
- Corbetta, P. (2007)**. Metodología y técnicas de investigación social (Edición revisada). McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U.
- Del Castillo, G., & Quintana, D. (2015)**. William Ascher: Conversación sobre las policy sciences y sus aportes para América Latina. *Perfiles latinoamericanos*, 23(46), 223–232.
- DeLeon, P. (2008)**. The Historical Roots of the Field. En R. Goodin (Ed.), *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 39–57). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0002>
- Etchebehere, C. (2014)**. La extensión en Ciencias Sociales: Trayectorias, debates y desafíos. En F. Ferrigno, M. Fry, M. López, A. Marssani, & A. Rieiro (Eds.), *Ciencias sociales y extensión universitaria: Aportes para el debate* (pp. 13–44). FCS, Udelar.
- Fernández-Cabana, M., Rúas-Araújo, J., & Alves-Pérez, M. T. (2014)**. Psicología, lenguaje y comunicación: Análisis con la herramienta LIWC de los discursos y tweets de los candidatos a las elecciones gallegas de 2012. *Anuario de Psicología*, 44(2), 169–184.
- Ferrigno, F., Fry, M., López, M., Marssani, A., & Rieiro, A. (2014)**. Ciencias sociales y extensión universitaria: Aportes para el debate. Udelar.
- Garcé, A. (2014)**. Regímenes políticos de conocimiento: Construyendo un nuevo concepto a partir de eventos de cambio seleccionados en políticas públicas del gobierno de Tabaré Vázquez (Uruguay, 2005-2009). *Revista de Ciencia Política*, 34(2), 439–458. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2014000200005>
- Garcé, A. (2023)**. El Régimen Político de Conocimiento en acción: Ciencia y política en la respuesta al COVID-19 en Uruguay (2020-2021). *Revista Estudios De Políticas Públicas*, 9(2), 66–84. <https://doi.org/10.5354/0719-6296.2023.70751>
- Gerring, J. (2015)**. ¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve? En R. Castiglioni & C. Fuentes (Eds.), *Política comparada sobre América Latina: Teorías, métodos y tópicos* (pp. 79–116). Ediciones Universidad Diego Portales.
- Gluckman, S. P. (2018)**. The role of evidence and expertise in policy-making: The politics and practice of science advice. *Journal & Proceedings of the Royal Society of New South Wales*, 151(1), 91–101.
- Goñi, M., Zeballos, C., & Bianco, M. (2021)**. Construyendo agendas situadas de conocimiento: Experiencias desde la Universidad de la República en Uruguay. *Revista Del IICE*, 50, 75–90. <https://doi.org/10.34096/iice.n50.11267>
- Kingdon, J. (1984)**. *Agendas, Alternatives and Public Policies*. Little Brown & Company.
- Lasswell, H. (1992)**. La orientación hacia las políticas. En L. Aguilar-Villanueva (Ed.), *El Estudio de las Políticas Públicas* (pp. 79–103). Porrúa.
- Naidorf, J., Giordana, P., & Horn, M. (2007)**. La pertinencia social de la Universidad como categoría equívoca. *Nómadas*, 27, 22–33.
- Oregioni, M. S., Avondet, L., & Durán, M. S. (2023)**. Redes de conocimiento en relación a agendas endógenas como alternativa a la tensión internacional-local. *Ciencia, Docencia Y Tecnología*, 34(69 (set-dic)). <https://doi.org/10.33255/3469/1628>
- Pielke, Jr. R. (2007)**. Making sense of science in policy and politics. En *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics* (pp. 135–152). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511818110.009>
- Rapley, T. (2014)**. Los análisis de la conversación, del discurso y de documentos. En *Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata, S.L.
- Rocha-Carpiuc, C. (2014)**. ¿Hacia una hegemonía del modelo mainstream norteamericano? Enfoques de la Ciencia Política en América Latina (2000-2012). *Revista Latinoamericana de Investigación Crítica*, 1, 133–159.
- Roth, A. (2016)**. Presentación de la sección temática Desarrollo y enseñanza en análisis de políticas públicas en América Latina. *Estudios Políticos*, 49, 189–191. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n49a10>
- Roth, A. (2017, julio)**. Hacia un enfoque de análisis barroco de las políticas públicas en América latina. 9o Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP).
- Valenti, G., & Flores, U. (2009)**. Ciencias Sociales y políticas públicas. *Revista Mexicana de Sociología*, 71, 167–191.